



Escrivá quiere incluir nuevos recortes de pensiones antes de fin de año

A cambio de los fondos europeos, el gobierno remitió a Bruselas un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, que incluía, entre otras muchas cuestiones, compromisos de reforma del sistema público de pensiones, para garantizar –dicen- su sostenibilidad. Recordemos que, para poder mantener el falso argumento de que el sistema no es sostenible, el gobierno en que se sienta Escrivá se niega a cumplir el mandato parlamentario de hacer una auditoría pública de la caja de la Seguridad Social. El objetivo real no es garantizar las pensiones públicas, sino dar pasos para lo que el capital financiero ansía: convertir las pensiones de jubilación en un negocio, a través de sus fondos de pensiones (lo que exige que las pensiones públicas de jubilación bajen lo suficiente para que no garanticen la supervivencia de los jubilados). Se trata de un gasto de 179.810 millones de euros, lo que supone un 11,8% del producto interior bruto (PIB), según el presupuesto consolidado de la Seguridad Social para 2022.

De paso, recordar que se dijo que estos fondos europeos eran sin condiciones, o sea, un engaño. Y que, además, esos fondos solo sirven para garantizar los beneficios de las grandes empresas.

En ese documento remitido a Bruselas, el gobierno se ha comprometido a legislar, con el plazo del 31 de diciembre como máximo, un nuevo paquete de reformas de las pensiones contributivas, lo que se conoce como la “segunda parte” de la reforma de Escrivá. Por tanto, el Gobierno apura las últimas semanas para presentar su propuesta. El pasado día 18, en un editorial, El País decía lo siguiente: “ha llegado el momento de presentar el sistema por el que España planea superar los déficits estructurales del modelo contributivo, algo que, dadas las circunstancias, no se puede hacer sin asumir algunos costes”.

Reducir el gasto en pensiones

La propuesta que baraja el ministro José Luis Escrivá tiene dos patas: el destope de las bases máximas de cotización (hoy to-

padas en los 4.139 euros), para que los salarios más altos coticen más. Una medida que aumentaría los ingresos del sistema. Pero lo central de la reforma es otra medida, para bajar el gasto en pensiones: la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión definitiva. Según los cálculos que baraja el propio gobierno, el aumento del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de los 25 a los 35 años, reducirá las futuras pensiones iniciales un 5,45% de media. Una medida brutal, si recordamos que más de la mitad de los jubilados (el 52%), es decir, 4,75 millones de personas, perciben una paga que se sitúa por debajo de salario mínimo interprofesional (SMI). Si tenemos en cuenta los distintos tipos de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), la pensión media en España es 1.087,48 euros.

Implicar a las organizaciones

El editorial de El País que citábamos antes dice: “el papel de las pensiones en el modelo social español es esencial y se debería hacer un esfuerzo por retomar los acuerdos básicos que han hecho que, con todas sus reformas y contrarreformas, el sistema haya superado innumerables vicisitudes”. Con esas palabras, llama al consenso de las fuerzas políticas en el pacto de Toledo y a la implicación de los dirigentes sindicales. Como sucedió con la reforma de Zapatero en 2011, que retrasó la edad de jubilación a los 67 años, y que se basó en el “Acuerdo Social y Económico” (ASE), firmado por los dirigentes de UGT y CCOO. Pero, por el momento, los dirigentes de ambos sindicatos se muestran reticentes. El ASE generó un importante rechazo entre los trabajadores y dentro de los propios sindicatos. Una campaña en la que participamos los militantes de la Cuarta internacional recogió más de 2.000 firmas de sindicalistas, que fueron entregadas a Toxo y Méndez, que se vieron obligados a recibir a una delegación de los firmantes. La participación directa de las direcciones de UGT y CCOO en un recorte de pensiones ha sido determinante para

que los pensionistas se hayan organizado en sus propias coordinadoras y plataformas, ajenas a los sindicatos y a menudo enfrentadas a ellos.

Por tanto, los dirigentes no se atreven a suscribir un nuevo recorte de pensiones, y posiblemente el apoyo de las confederaciones no aseguraría, hoy, al gobierno, la “paz social” necesaria para imponer ese nuevo recorte.

La auditoría de las cuentas, una absoluta necesidad

Como señalábamos al comienzo de esta carta, todas las reformas de las pensiones, todos los recortes, se han basado en el mismo argumento: el sistema público de pensiones, tal y como está ahora, es “insostenible”, y, para garantizar las pensiones futuras, hay que introducir reformas, hay que recortar las pensiones, hay que prolongar la edad de jubilación.

Y, sin embargo, recordemos que Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, en una comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), reconocía que, sólo entre los años 1989 y 2018, la Seguridad Social asumió 103.690 millones de euros en gastos no contributivos (los denominados gastos impropios) y que, por lo tanto, debían haber sido financiados por el Estado en vez de ser sufragados sacándolos de las arcas del sistema de pensiones. Un estudio de CCOO, que abarca muchos más años atrás, sube la cifra de “gastos impropios” a más de 500.000 millones.

La COESPE levantó la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, una propuesta que fue retomada por otras plataformas y, además, muchas instancias sindicales la apoyaron, desde El Congreso Confederado de UGT a varias Federaciones de CCOO, así como numerosas secciones sindicales, un movimiento que sigue en curso. La propuesta fue asumida por varios grupos parlamentarios y finalmente incluida en la votación de la primera parte de la “reforma Escrivá”. Este mandato parlamentario ha sido incumplido.

El pasado 2 de noviembre, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, res-

pondría en el congreso a una interpelación del diputado Jordi Salvador, de ERC, que preguntaba por el incumplimiento del mandato parlamentario, que se cumplirá con esa condición, que aún “tenemos tiempo”, pero que en este momento “estamos enfrascados en la recuperación económica”. Montero añadió, en esa misma intervención, que el sistema de pensiones es “sostenible”. Lo que no impide que Escrivá siga argumentando, para imponer la reforma que ha comprometido a Bruselas, que hay que hacer cambios pa-

ra garantizar su sostenibilidad.

La democracia exige que las cuentas del Estado sean claras. Desde el franquismo se ha impuesto la existencia de “gastos ocultos”. El presupuesto de la Casa Real es falso, no incluye el 60% de los gastos que nos cuesta la parásita familia Borbón. El presupuesto militar es igualmente falso, y no incluye muchos gastos disimulados en otras partidas del presupuesto. La auditoría de cuentas de la seguridad social es fundamental para garantizar el futuro de millones de pensionistas. En efecto la

auditoría demostraría la sostenibilidad del Sistema (realizada por el Tribunal de Cuentas). Pero además evidenciaría la corrupción del funcionamiento de las instituciones heredadas del Franquismo. De ahí la resistencia de éstas a su realización. Resistencia a la que el gobierno se somete incluso cuando los grupos parlamentarios la votaron el 28 de diciembre del 2021. De ahí la importancia de continuar la batalla al respecto integrando la exigencia a los parlamentarios de que hagan cumplir el acuerdo.

Nuestros compromisos...



La lucha por un sistema público de pensiones ÚNICO y de REPARTICIÓN

SU ACTUALIDAD EN CHILE Y EN ESPAÑA

Video-conferencia con **LOIS MESINA**, portavoz de la COORDINADORA "NO A LAS AFP" (CHILE)

Jueves 24 - 19 h.

Unirse a la reunión Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/81356537866>

- Presenta, Juan Miguel Fernández, de COESPE Madrid
- Intervendrá, Jordi Salvador, diputado en Cortes, del grupo parlamentario de ERC

Organiza: **INFORMACIÓN OBRERA**

Madrid defiende, en masa, la sanidad pública
Hay que continuar esta lucha y llevarla al resto del Estado

Cientos de miles han salido a la calle el día 13, demostrando que Madrid defiende con todas sus fuerzas la sanidad pública. Rechaza todos los medios utilizados por el capital para robarle su sistema de salud. Demuestra que Ayuso demuestra la sanidad para privatizarla. Exige la dimisión de Ayuso como prenda de que su reformado se va a cumplir.

Cientos miles de manifestantes exigieron de todos los cofrades de Madrid capital y de la Comunidad demuestran que esa lucha tiene sus raíces en cada pueblo y cada rincón.

No sólo una gran movilización obrera y democrática en la que cada manifestante se sentía parte de un enorme impulso que expresa la determinación común, de todos, de lograr un objetivo. En el Paseo del Prado, en Navacillos, en Alcalá, en Gran Vía, había innumerables carteles, que, con palabras diversas, todos decían lo mismo y se fundían en un solo grito en Obrero: Sanidad Pública.

Es la sanidad de todos, que han conquistado sucesivas generaciones de los partidos del Estado español. La lucha por la sanidad ha sido la larga batalla común de los clases trabajadoras y los pueblos de Europa, de todo el mundo. Porque en hay derecho a la salud si no hay un servicio público que lo garantice, y si ese servicio no tiene el personal, los medios, los fondos suficientes.

En cada barrio y cada localidad se ha reclutado en estos años la defensa de la sanidad pública, y el día 13 la han expresado todos juntos. Trabajadores de la sanidad y la población suaria de la zona. Con el esfuerzo y dedicación diarios de los profesionales de la sanidad, en condiciones de trabajo a merced y dolencias, se viene peleando por sacar adelante el sistema sanitario público.

Lo que pasa en la sanidad de Madrid sucede, con raíces, en todas las comunidades, con gobiernos de derecha o de izquierda, a partir de los presupuestos estatales comunes. En Cataluña hacen falta tantos médicos en la Atención Primaria como en Madrid. En Andalucía se cierran consultorios y servicios por falta de médicos. En todas partes, las listas de espera de meses e incluso años suponen negar el derecho a asistencia sanitaria. ¿Pueden los responsables sindicales, políticos, los partidos culturales? ¿Hay que mantener la resistencia fragmentada cuando el ataque a la Atención Primaria es común? La movilización en Madrid no termina, no puede terminar, con la manifestación del día 13. Hay que continuar hasta vencer. La población de otras partes tiene motivos muy parecidos a los de Madrid. La única solución es la movilización unida. No basta con el esfuerzo en Madrid. Madrid ha planteado el problema, que no puede resolver Madrid sola.

La participación de cientos de miles en la manifestación de Madrid demuestra que no es cierta el mundo argumento de que la gente está desmotivada, de que no hay condiciones para la movilización. Sindicatos, partidos, asociaciones han de poner la organización de esa movilización a escala estatal y en cada localidad. El cuadro político y sindical paralizado, adormecido, solo por localidades o autonomías, no es lo que el pueblo exige. Cada militante e instancia debe plantear en su entorno que hay que poner todas las fuerzas en por de guerra para cortar el fundamento de la sanidad, de la enseñanza, de la industria, del transporte. Hace falta organización, pero el cuadro organizado no debe seguir así.

Para expresar, es necesario un presupuesto de urgencia para salvar la sanidad pública, para recuperar a los miles de profesionales perdidos, para hacer los inversiones necesarias. Los presupuestos elaborados por el gobierno no corresponden a lo que el pueblo, todos los pueblos exigen. No puede haber presupuesto para la guerra, para pagar la deuda a los especuladores, y para la sanidad y la escuela públicas. Gastos militares, para escuelas y hospitales.

Para contribuir al gran esfuerzo de lucha y organización, el comité de relación de información Obrero se dispone a difundir cada paso en a la resistencia, en cualquier localidad, para facilitar su extensión y coordinación.

INFORMACIÓN OBRERA
Comité Obrero de la Lucha de Clases

Campaña de extensión y suscripciones a esta Carta Semanal



Si no la recibes, te invitamos a que la recibas cada semana. Si la recibes, te proponemos que suscribas a otros compañeras y compañeros a los que pueda interesar.

La elaboración y envío de esta Carta conlleva algunos gastos. El POSI, que la edita, no tiene ni quiere subvenciones, toda su actividad y sus publicaciones son financiadas exclusivamente por trabajadoras y trabajadores, que quieren apoyar, en este caso, la publicación de la Carta Semanal. Pedimos un apoyo de **5 EUROS** al año o lo estimes oportuno.

Nuestra cuenta corriente en La Caixa es: 2100 2812 51 0200071314. Indicando: Apoyo Carta Semanal

- Para recibir la Carta envía un correo electrónico a: info@posicuarta.org

- Puedes contactar desde: <http://posicuarta.org/cartasblog/contacto>



Partido Obrero Socialista Internacionalista
Sección en España de la I.O. Internacional

Calle Desengaño, 12 (1º 3A). 28004 - Madrid
Teléfono: 91 522 23 56
<http://www.posicuarta.org>
Búscanos en Twitter: @posicuarta